

En el marco de la iniciativa impulsada por la Universidad del Desarrollo:

Grupo transversal propone nuevos acuerdos y medidas para enfrentar el Chile del futuro

Ex ministros y académicos que participaron de "Diálogos de Futuro: ¿Cómo volver a crecer?" escriben para "El Mercurio" y llaman a establecer políticas de largo plazo y abordar temas como la modernización del Estado.

GABRIEL PARDO

Aseguran que no importa el color político de los participantes. La idea es buscar consensos y proponer ideas para el futuro de Chile.

La iniciativa, de hecho, es impulsada por dos ex ministros de gobiernos de distinto signo: Cristián Larroulet, ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia en la administración de Sebastián

Piñera, y Eduardo Aylwin, ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Ambos, quienes hoy trabajan en la Universidad del Desarrollo, crearon la iniciativa "Diálogos de Futuro: ¿Cómo volver a crecer?".

En esa instancia han participado cerca de 180 profesionales, entre los que se cuentan ex ministros, académicos y personalidades del mundo político, económico y social.

Una de las premisas es retomar la conversación y la búsqueda de acuerdos en materias como la modernización del Estado, las alianzas público-privadas, la inversión en infraestructura, las políticas de salud y educación y el desarrollo humano.

"El Mercurio" consultó a algunos de los participantes acerca de las propuestas que deben estar en el debate para construir el Chile del mañana. Escribieron la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin; el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich; el ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz; el economista y ex presidente de BancoEstado, Guillermo Larraín; Susana Jiménez, coordinadora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y Sebastián Soto, abogado constitucionalista, además de los organizadores, Cristián Larroulet y Eduardo Aylwin.

Mariana Aylwin: "Mejorar la educación inicial"

En educación, Chile está experimentando una crisis de crecimiento, más que de sistema. El principal problema es que ni la educación superior ni la educación superior se han adecuado a la masificación de la educación, por una parte, así como tampoco a las nuevas realidades del siglo XXI. Tenemos jóvenes de este siglo que aprenden con profesores formados para el siglo XX e instituciones que no han cambiado mucho en relación con el siglo XIX. Hay un gran desfase entre lo que los estudiantes están aprendiendo y el mundo en que viven y vivirán. Por ello, las reformas educacionales deberían centrarse en qué y cómo se educa en tiempos de la globalización, las redes digitales, los nuevos problemas del mundo contemporáneo y qué deberían aprender los estudiantes en todos los niveles y en todos los ámbitos. Es decir, en desarrollo de competencias, habilidades, valores para la vida personal, la vida en sociedad y las demandas del país. En este contexto y en el desafío de la calidad de los aprendizajes, se inserta la equidad del sistema.



Mariana Aylwin, ex ministra de Educación.

Respecto de las medidas a tomar, me parece que al menos hay tres fundamentales. La primera, ampliar y mejorar significativamente la educación inicial. La segunda, cambiar los currículos y las metodologías de enseñanza, lo cual requiere una profunda transformación del reclutamiento, la formación y el apoyo a los docentes. En tercer lugar, generar estímulos y espacios para el desarrollo de innovaciones y el apoyo a estudiantes rezagados, lo cual hoy día representa una dificultad real para las instituciones educativas.

Eduardo Aylwin: "Volver a crecer"

En los años 2006, 2007, 2013, y enero de 2017, se produjeron accidentes sucesivos en el vuelo isla Mocha a Titiá. Las causas se repitieron invariablemente: haber despegado sin plan de vuelo, con pésimas condiciones climáticas, sin coordinación con la Dirección de Aeronáutica, bajo decisiones improvisadas de los pilotos. Esta es una imagen perfecta para describir las causas políticas—institucionales que han caracterizado el freno al desarrollo chileno de los últimos años.

Parámonos por el Estado y su rol. Si bien es cierto que de las tres ramas clásicas para su contribución en la sociedad—estabilización, provisión de bienes colectivos, distribución equitativa de ingresos—la primera (coordinación macro) es la que marca progreso a nivel razonable, no es menos cierto que ella rige hoy bajo el trasfondo de estancamiento prolongado. Las agencias respectivas del sector público han de priorizar el tema de "estabilidad para y por el crecimiento económico" de manera sustantiva. Crear al doble es la meta social requerida, más allá de cualquier ideología. ¿Cómo?

Los Diálogos han enfatizado tres cosas: elevar la productividad general tanto privada como pública; incorporar a la economía moderna de mejor forma a los trabajadores por cuenta propia e independientes; aumentando la participación laboral femenina; elevar la conectividad de redes reduciendo la brecha digital; y subir la inversión directa en infraestructura al orden del 3,5% del PIB anual.

En concreto y en el último tema, se tramita en el Congreso un Fondo de Infraestructura de unos 9.000 millones de dólares de patrimonio; pero los participantes—valorando esa iniciativa—señalaron: se requiere invertir el doble, y bajo fórmulas de asociatividad con el sector privado.

El tema distributivo resultó ser en el actual ciclo político "la madre de todas las batallas". La discusión pública, el Parlamento, los partidos han estado golpeándose la cabeza en un diálogo de sordos, donde no surge un hilo conductor.

La improvisación ha terminado campeando en



Eduardo Aylwin, ex ministro de Hacienda.

varias leyes nuevas (educacional, tributaria). Todo ese cuadro hace que el tema de equidad social se estanque a plazo medio y largo. A menos que se logre llegar a un acuerdo social que tenga gravitación.

Los participantes de nuestros Diálogos recogieron esta disyuntiva político-social, dando un par de pistas de gran interés. La primera deriva de una máxima clásica: saber priorizar mucho mejor. No se saca nada con dispersar las acciones del Estado en mil áreas distintas sin un plan de acción bien calibrado. Hoy, una buena parte de las agencias sociales del Estado están falentes (léase Senama, Gendarmería, salud hospitalaria). No puede agregarse más programas así sin más. Sumar listas de obligaciones supletorias *ad infinitum*, sobre un conjunto de agencias ya debilitadas, es fatal.

Habría que reorganizar al Estado distributivo. La segunda corriente ha sido una revalorización del principio humanista de subsidiariedad. Un país gana en dinamismo, convivencia social, libertad y bienestar, cuando entiende como sociedad organizada que el Estado debe aceptar el rol de creatividad e innovación que es propio de entes sociales intermedios conformados por personas de carne y hueso. Al final del día, la conjunción de libertad y de participación social es la combinación de las cualidades que enaltecen el significado del desarrollo.

Cristián Larroulet: "El desarrollo no es un tema técnico, sino político"

Estamos convencidos de que para que el país recupere el crecimiento económico y las oportunidades de progreso social se necesita un clima nacional de acuerdos, de hacer las cosas bien, de diálogo, y de buena política, realizada con profundo espíritu de servicio público. El desarrollo no es un tema técnico, sino que político!

Pero eso requiere construir espacios de conversación y las universidades deben proveer estas instancias. Por ello, la UDD nos convocó a Eduardo Aylwin y a mí para organizar "Diálogos de Futuro". Ambos somos profesores de la escuela de economía y negocios, pero además fuimos ministros de Estado de diferentes gobiernos.

No compartimos las mismas ideas, pero sí nos une el convencimiento de que la buena política se hace con espíritu de unidad y no con "retroexcavadora".

Lo que hemos visto en encuentros con alrededor de 180 personas del mundo político, empresarial y de expertos de los más diversos colores políticos, desde la izquierda a la derecha, es que no solo hay buenas propuestas técnicas, sino que una enorme confianza de que Chile puede volver a crecer.

Un año después de haber lanzado esta iniciativa, estamos más optimistas sobre la viabilidad política de recuperar el crecimiento económico del país.



Cristián Larroulet, ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Carlos Cruz: "Invertir en infraestructura pública, por lo menos, el 3,5% del PIB"

Falta una mirada de largo plazo, vinculada a una estrategia de desarrollo país, lo que nos ha llevado a restarle significado a la inversión en infraestructura. Si bien mantenemos un lugar de privilegio en cuanto a la calidad de nuestra infraestructura, esto nos ha llevado a perder competitividad en relación con el región. Hemos pasado de ser el número 28 en el mundo, a ser el número 44 en cuanto al aporte de la infraestructura al producto nacional. Esto ha tenido fuertes repercusiones en el bienestar de las personas, especialmente en los sectores urbanos.

—Es necesaria una institucionalidad que se ocupe de mirar el país a largo plazo y defina los proyectos que faciliten alcanzar objetivos de desarrollo, con un énfasis en mayor bienestar para



Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas.

los sectores más vulnerables. —Un compromiso nacional de invertir en infraestructura pública, por lo menos, el 3,5% del PIB para los próximos 15 años, frente al 2,4% que se invierte hoy. Si el Estado mantiene un nivel de

inversión del 2,1% (promedio de los últimos 10 años), el saldo puede ser materializado por el sector privado. Hay recursos y disposición para ello.

—Una mayor profundización de la relación de cooperación entre lo público y lo privado para financiar proyectos de envergadura. Para ello se requiere: más respeto de sus costos y retornos en la construcción y operación de activos públicos; mayor agilidad de parte del sector público en resolver requerimientos ambientales y sociales que grandes proyectos en infraestructura generen.

Jaime Mañalich: "Toda forma de cooperación público-privada ha sido demonizada en salud"

En Chile, la mayor responsabilidad por la entrega de servicios de salud reside en el Estado. Es el área "más estatizada" en la entrega de derechos sociales. Esto implica una responsabilidad ante una de las demandas ciudadanas más potentes. Históricamente, esta responsabilidad se instituye formalmente con la creación del Servicio Nacional de Salud, el año 1952, que sigue el modelo Beveridge del NHS británico.

En la administración de esta provisión de un servicio, que constituye la segunda prioridad para la opinión pública después de seguridad, el Estado ha fallado. Los hospitales y centros de atención primaria han sido capturados por sus funcionarios, la provisión es tardía y de baja calidad. La actual administración ha acentuado estas falencias, al dar más



Jaime Mañalich, ex ministro de Salud.

responsabilidades al ministerio, sin aportar los recursos y las capacidades para el desafío. A la vez, toda forma de cooperación público-privada ha sido demonizada. Resultado: mayor inequidad, más listas de espera, la mayor desigualdad de los servicios, hospita-

les que no construyen y huelgas que enferman y matan. El principal problema es de gestión: mejor productividad en el uso adecuado de pabellones, recursos profesionales, camas e insumos.

La propuesta urgente es una reforma del sector público, que lleve a privilegiar el rol de autoridad sanitaria del ministerio, relevando a la gestión de los servicios de salud, materia que se incorporó solo el año 2005 y que debe ser corregida. El financiamiento debe favorecer el pago por prestaciones valoradas por sobre el presupuesto histórico, y todo el personal debe participar de la mejora de la eficiencia técnica, o bien las autoridades de los servicios, que deberían reducirse en número, elegidas solo por Alta Dirección. Estos serían pasos sencillos hacia una mayor justicia social en salud.

Susana Jiménez: "Redinamizar las inversiones"

La economía chilena ha sufrido una severa desacceleración. El año 2016 sumó el tercer año consecutivo de caída de la inversión y el crecimiento del PIB proyectado para el 2017 seguirá creciendo al magro promedio de estos cuatro últimos años: 2,0% anual. El desafío, por tanto, es retomar un mayor crecimiento.

Para ello se necesita mejorar las expectativas a fin de redinamizar las inversiones. Las reformas aprobadas y varios de los proyectos que se discuten en el Congreso han generado una incertidumbre importante y han debilitado la certeza jurídica necesaria para las inversiones de largo plazo. El desafío es fortalecer los espacios de diálogo y trabajo conjunto, que alienten un cambio en el clima de negocios.

Un segundo aspecto es privilegiar una mirada de futuro. Urge evaluar si tenemos los instrumentos y marcos regulatorios adecuados para subimos al tren del progreso o si se terminarán convirtiendo en una carga pesada. La clave es alentar la innovación, la adaptabilidad laboral, los mercados de capitales fluidos y sólidos, y una educación, formación técnica y capacitación acorde a los tiempos. Por último, avanzar en la modernización del Estado, una tarea necesaria y que puede tener alto impacto en el desarrollo del país.



Susana Jiménez, coordinadora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.

Sebastián Soto: "Fortalecer la potencia del Congreso para ser un real contrapeso del Gobierno"

La modernización del Estado no es una cuestión exclusiva del Poder Ejecutivo sino que debe involucrar al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público.

El Congreso es de esas organizaciones donde un mal parlamentario puede llegar a hacer mucho más daño a sus pares y a la propia institución que en otros colectivos. Por eso es tan importante una reforma en materia de control ético que discipline esa amplia gama de conductas que no son ilegales pero sí inadecuadas. Las trampas, los insultos, las pelotas y el aprovechamiento deben ser evaluados y fiscalizados por entidades de control ético.

Es relevante fortalecer la potencia del Congreso para ser un real contrapeso del Gobierno. Ello no se logra por la vía de cambios constitucionales sino que fortaleciendo las capacidades de reacción y análisis, por ejemplo, institucionalizando un sistema de asesoría parlamentaria de confianza. Con ello, de paso, comprenderemos que el "buen parlamentario" no es aquel que más mociones presenta o quien está en su escritorio durante toda la sesión.

El Poder Judicial debe modernizarse, fortaleciendo el mérito en los mecanismos de calificación, profundizando la



Sebastián Soto, abogado constitucionalista.

transparencia de las promociones y en el control disciplinario, y acercando su atención al ciudadano. En esto último, más que jueces activistas, se requieren cambios como serían institucionalizar la justicia vecinal y focalizar a los jueces en lo que son insustituibles.

El Ministerio Público es una entidad nueva, por lo que su cultura institucional debiera estar en la vanguardia. Pero hemos visto que no es así y que los incentivos para cumplir sus funciones no son los correctos. Dicho de otra forma: todos sabemos a qué fiscal teme la clase política; pero nadie sabe a qué fiscal temen los narcotraficantes o las bandas delictuales.

Guillermo Larraín: "Seguro para la 4ª edad"

La mayor longevidad, en el contexto de una edad legal de jubilación que no ha cambiado, explica parte de las bajas pensiones en Chile. Justo después del retiro es tan alta la probabilidad de sobrevivencia, que la pensión solo se puede financiar con el ahorro acumulado durante la vida activa y que gestionan las AFP. A medida que la persona envejece, la lógica de financiamiento de la pensión cambia. En algún momento, la probabilidad de sobrevivencia baja lo suficiente para que su financiamiento "óptimo" no sea ahorro sino seguro.

Es un seguro contra el riesgo de vivir excesivamente y el ahorro no alcanza para una pensión digna. Por la naturaleza de este riesgo—está fuera de nuestro control, afecta a toda la población—, lo mejor es que sea un sistema único para maximizar la repartición de riesgos, es decir, que los que van a vivir mucho se compensen con los que vivan menos.

Este seguro debe ser financiado por una prima de entre 2% y 3% del salario, en función del modelo que se elija. El seguro podría ser gestionado por una empresa privada licitada, como con el seguro de cesantía, o una empresa de seguros estatal de giro único para la longevidad. Esta solución es más flexible, porque no sabemos hasta qué edad vivarán nuestras hijas y nietos y el margen de error es enorme. Si sabemos que vivarán mejor, que podrán tener una actividad física e intelectual más larga que la generación actual. Una empresa privada no internaliza ese proceso, el Estado sí, porque esa mayor actividad tendrá un correlato tributario.

Separar el retiro en dos edades permite subir las pensiones entre 20% y 25% para los pensionados, pero además, el seguro de 4ª edad es un pilar que le falta al sistema chileno, que reposa excesivamente en la acumulación de ahorro que, siendo indispensable, no basta para enfrentar los desafíos de la longevidad.



Guillermo Larraín, economista, ex presidente de BancoEstado.